

Prisciliano Zambrano ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra el Alcalde 2º de Monterey Lic. Perfecto Gutierrez, que lo citó á juicio verbal y lo conminó con imponerle multas si no concurría al juicio que le promovió el C. Julio Treviño, y con fallar en rebeldía, con lo que el quejo so dice, que se vulnera en su persona la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitucion general, por no ejercer autoridad legítima el C. Alcalde Lic. Perfecto Gutierrez. Considerando: que segun lo que consta en autos, se ha vulnerado en la persona de Zambrano la garantía que invoca; de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la misma Constitucion, y además por los legales fundamentos en que se apoya la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon, se decretar que se confirma la indicada sentencia, fecha 3 de Agosto último, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. Prisciliano Zambrano, contra los actos del C. Alcalde 2º de Monterey, por los que lo mandó citar conminándolo con multas y con seguir el juicio en rebeldía, si no obsequiaba las citaciones que se le hicieron.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Arza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México Octubre 19 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez y socios, contra el decreto promulgado en 7 de Mayo de 1874, por la Legislatura de dicho Estado.

PRIMER PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Antonio Robert, se ha presentado por el escrito que antecede, pidiendo amparo como apoderado sustituto de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Joaquin Garcia Icazbalceta, D. Pío Bermejillo, D. José T. Guerra y D. Alejandro Arenas, propietarios de fincas rústicas en el Estado, contra la ley de Hacienda expedida para el mismo, en 6 de Mayo próximo pasado. Fundan su queja, en que la mencionada ley es retroactiva y fué promulgada por autoridad que ilegítima, es incompetente para ocasionarles molestias en sus intereses y posesiones, y por consiguiente, con su ejecucion se violan las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitucion.

La Suprema Corte de Justicia tiene declarado en diversas ejecutorias, que la incompetencia por ilegitimidad, está comprendida como cualquiera otra, en la prohibicion del artículo 16 del Pacto federal; pero reservando este punto y el de retroactividad de la ley, que ahora se reclama, para ocuparme de ellos en lugar oportuno en mi pedimento sobre lo principal, y concretándome por ahora al punto de suspension, he tenido siempre como regla, y en consecuencia, he pedido constantemente como Promotor, que la suspension debe decretarse, siempre que el acto reclamado cause á los quejosos gravámen irreparable en la sentencia definitiva del juicio de amparo, y cuando su consumacion haga inútil ese juicio

y la decision de los tribunales federales.

En nuestro caso, la suspension del cobro de las contribuciones decretadas por la ley que se reclama, ocasionará para el Estado una disminucion temporal en sus rentas, de que puede resarcirse á la conclusion de este juicio; y de que no se decreta la suspension resultará para los quejosos, la perdida de los bienes que ya se les han embargado, y cuyo resarcimiento no puede comprender la sentencia en que se conceda el amparo. Los bienes embargados ya por las contribuciones que establece esa ley, consisten en los sembrados, enceres de las negociaciones, útiles de labranza y frutos en beneficio.

Por lo que, y siendo notoria la urgencia del caso, el Promotor pide, que sin nuevo trámite, de conformidad con la peticion de los quejosos y con arreglo á la parte final del artículo 5 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decrete la suspension y se pida á las autoridades ejecutoras el informe con justificacion prevenido por el artículo 9 de la citada ley.

Otrosí: debe mandarse reponer el papel del sello 59 empleado en este pedimento.

Quernavaca, 8 de Junio de 1874.—
Nicolás Medina.

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que para que los tribunales federales puedan decidir en este recurso, es indispensable que se reciba á prueba, y queden esclarecidos los hechos en que se hace consistir la violacion de garantías.

Reservándome pues pedir que se conceda ó deniegue el amparo, para pedir llegue el momento de alegar, y entonces esclarecidos los hechos, hacer extensamente el análisis de la cuestion sobre lo principal, á V. suplico se siiva mandar recibir este negocio á prueba, conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Morelos, 22 de Junio de 1874.—
Nicolás Medina.

Alegato del C. Promotor fiscal

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el recurso de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, en representacion de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pío Bermejillo, D. José Tortello Guerra, D. Joaquin Garcia Icazbalceta hermanos y D. Alejandro Arenas, contra la ley de Hacienda, expedida para el Estado de Morelos en 6 de Mayo del presente año, por violacion de garantías, supuesto su estado que es el de alegar, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar: que la parte quejosa ha probado bien y cumplidamente que el C. Lic. Agustín Clavería, Gobernador sustituto, que sancionó la ley reclamada, no era autoridad legítima, ni en consecuencia, competente; que la misma ley es retroactiva y por consiguiente, que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos, contra la ejecucion de la ley reclamada que viola en sus personas las garantías consignadas en los artículos 16 y 14 de la Constitucion federal, pues así procede en términos de rigurosa justicia; segun consta de los fundamentos legales que paso á exponer.

Los mismos peticionarios de este amparo prosiguieron ante este Juzgado de Distrito un otro recurso de amparo, en que la Suprema Corte de Justicia pronunció ejecutoria de 11 de Abril de 1874, declarando que prohibida la reeleccion del Gobernador en el Estado de Morelos, conforme á su Constitucion primitiva, y no habiendo sido esta bien reformada, el C. General Francisco Leyva no era Gobernador legítimo del Estado, y por consiguiente, la ley de 12 de Octubre de 1873, que él sancionó, como mandato de autoridad ilegítima violaba la garantía que otorga el artículo 16 del Pacto federal.

Publicada esa ejecutoria, el Sr. Leyva

que antes se habia separado, del Gobierno continuó haciendo uso de una licencia que con posterioridad prorogó la Legislatura, y quedó sustituyéndole el C. Lic. Francisco Clavería, Presidente del Tribunal nombrado por la Legislatura, cuando renunció el propietario C. Lic. Luis Flores y Caso, conforme á la fraccion XVII del artículo 45 de la Constitucion del Estado.

El artículo 9º transitorio de esa misma Constitucion, previno: que se continuarian observando en todos los ramos de la Administracion, las leyes secundarias vigentes en el Estado, en lo que no se opusieran á la Constitucion; y como la ley de 11 de Julio de 1868, que despues fué sustituida en la materia de procedimientos por el Código actual, tenia el carácter de orgánica de tribunales, el 2º Magistrado propietario C. Lic. Vicente Rodriguez Villanueva dió á la prensa una protesta, en que consideraba como subvertido el orden constitucional en el Estado, porque segun la citada ley, los Magistrados deben sucederse en el orden de sus nombramientos, y correspondia al 2º Magistrado sustituir al Presidente en sus faltas absolutas ó temporales, y la facultad concedida por la Constitucion á la Legislatura, se entiende restringida á nombrar interinamente al último de los Magistrados del Tribunal.

Esa protesta se publicó con fecha 24 de Mayo; el Sr. D. Francisco Clavería que al mismo tiempo es diputado al Congreso general, por el Estado de Morelos, tuvo que presentarse al periodo de sesiones que comenzó el 1º de Abril, y lo substituyó en el Gobierno del Estado el C. Lic. Agustin Clavería, quien sancionó y publicó los decretos siguientes.

"Nº 40. Art. 1º.—Siempre que el Congreso, en uso de la facultad que le concede la fraccion XVII del artículo 45 de la Constitucion del Estado, nombre ministro ó ministros interinos del Tribunal Superior, el mismo Congreso determinará el lugar de orden que el nombrado ó los nombrados de-

ben ocupar en el propio Tribunal."

"Art. 2º.—En lo sucesivo, siempre que haya de procederse á la renovacion constitucional de los Magistrados, el Congreso al computar el resultado de la eleccion, y declarar quiones son las personas que deben ocupar las Magistraturas en el siguiente periodo, determinará tambien quien de ellas debe ocupar la presidencia. El así nombrado, la desempeñará dos años, pasados los cuales, el Congreso procederá á nuevo nombramiento de Presidente, de entre los mismos Magistrados, por igual periodo, pudiendo haber lugar á la reeleccion."

"Art. 4º.—Se derogan los artículos 52 y 53 de la ley de 11 de Julio de 1858, y cualesquiera otras disposiciones que sean contrarias á lo que en esta se establece."

"Cuernavaca, Abril 2 de 1874."

"Nº 41. Art. 1º.—El Congreso del Estado, en uso de las facultades que le conceden la fraccion XVII del artículo 45 de la Constitucion particular, y la ley orgánica publicada el día de ayer, bajo el Nº 40, ratifica el nombramiento que con fecha 11 de Agosto del año próximo pasado hizo en la persona del C. Lic. Francisco Clavería para ministro interino y Presidente del Tribunal de Justicia del mismo."

"Art. 2º.—El mismo C. Lic. Clavería se presentará desde luego á ratificar la protesta que ya tiene hecha para el ejercicio de su cargo."

"Cuernavaca, Abril 21 de 1874."

Y, "Nº 42. Art. 1º.—Se declara que está y ha estado vigente la ley de 12 de Octubre de 1873."

"Art. 2º.—Los contribuyentes que por cualquier motivo no hubieren pagado contribucion en lo que vá corrido del año fiscal hasta la fecha de la presente ley, para igualarse con los demas contribuyentes del Estado, pagarán doble durante cuatro meses, la cuota que se les asigne conforme á las prescripciones de la ley citada."

Art. 3º.—Se autoriza al Ejecutivo para alterar los plazos designados en los artículos

relativos de la citada ley de 12 de Octubre de 1873, tomando por base las exigencias del Erario del Estado y la mas perfecta equidad."

"Cuernavaca, Abril 21 de 1874."

Este último decreto no llegó á ejecutarse respecto de los quejosos, y contra los otros formuló nueva protesta el Lic. Rodriguez Villanueva, publicada con fecha 26 de Abril, diciendo entre otras cosas que la derogacion de la ley orgánica, no podia tener efecto retroactivo, y siendo nulos los actos que como Gobernador practicó D. Francisco Clavería, carecian hasta de sancion legal esos decretos, y tambien el que designó al Lic. Agustin Clavería para sustituir al Gobernador, por lo que todos los habitantes del Estado podian pedir amparo contra esas infracciones constitucionales.

El C. Francisco Clavería volvió á separarse del Gobierno, y le sustituyó de nuevo D. Agustin del mismo apellido, por impedimento ó licencia del Sr. Quiñones, y el segundo publicó y sancionó una nueva ley de Hacienda expedida por la Legislatura el 6 de Mayo último, bajo el N° 49, cuya ley consta en el periódico oficial, cuyo ejemplar es adjunto, y con algunas innovaciones que despues examinaremos, es la de 12 de Octubre contra que se concedió el primer amparo.

Por último, el 15 de Mayo, el C. Lic. Miguel Quiñones, Gobernador sustituto tambien, publicó otro decreto, N° 55, de 15 de Mayo último, estableciendo: que hasta el 31 de Diciembre, ninguna finca azucarera se dará por clausurada si tiene caña sembrada en los términos de su comprension, fija la manera de comprobar esa circunstancia, y dice: que si la Direccion de rentas la encuentra justificada, se considerará la finca como rústica, pagará el 10 al millar, y la exaccion de la cuota se hará como en los giros y establecimientos, segun el artículo 20 de la ley de 6 de Mayo.

Mientras tanto, el personal del Tribunal Superior, sufrió varios cambios, y segun los

informes con justificacion rendidos ahora, el Tribunal se formó primitivamente de los CC. Licenciados Luis Flores y Caso, Presidente, Vicente Rodriguez Villanueva, Magistrado 2º, Miguel Quiñones, Magistrado 3º y Refugio de la Vega, Fiscal.

Por renuncia del Sr. Flores y Caso, la Legislatura nombró Presidente interino al C. Lic. Francisco Clavería. Como este Sr. tuvo que ir á desempeñar su cometido de representante al Congreso de la Union, el Tribunal quedó compuesto de los CC. Vicente Rodriguez Villanueva, como Presidente, Miguel Quiñones como Ministro 2º, y Agustin Clavería que era uno de los suplentes nombrados por los ministros propietarios al principio del año, y que entró á desempeñar el cargo de Magistrado 3º. A principios de Marzo, el C. Lic. Rodriguez Villanueva, en uso de las facultades que como Presidente le concedió la ley, se separó del Tribunal por quince dias, y entonces quedaron, el Sr. Quiñones como Presidente; D. Agustin Clavería como Magistrado 2º, como 3º, el Lic. Manuel Argumedo, que era otro de los suplentes nombrados á principio de año.

Por último, el Sr. Rodriguez Villanueva no volvió, y habiendo obtenido una licencia el Sr. Quiñones para atender el restablecimiento de su salud, ascendió á la presidencia accidental el Sr. D. Agustin Clavería, á la 2ª Magistratura el C. Manuel Argumedo, y entró á integrar el Tribunal el C. Lic. Bernardo Gallegos, tambien suplente nombrado. Entonces, segun se expresa en los informes, ocurrió la falta de Gobernador sustituto por licencia que le concedió la Legislatura, y entró á sustituirle el C. Agustin Clavería, que como dije, sancionó la ley de 6 de Mayo.

Esta ley asignó para cubrir el presupuesto del Estado, en los siete meses y medio desde el 16 de Mayo á 31 de Diciembre, entre otras contribuciones, la de cuatro centavos por arroba de azúcar que se elaborase por el sistema comun, ocho centavos por arroba

de miel pancla ó pancón, y doce y medio centavos por cada arroba de miel, que se convirtiera en azúcar por el sistema de turbinas, y los Sres. Portillo y Gomez y socios, que explotan y poseen las haciendas azucareras, de "El Puente," "San Gaspar," "San Carlos," "Santa Clara," "Tenango," "San Vicente," "Tomisco," "Chiconcuac," "El Hospital" y "Zacatepec," interpusieron y han seguido el presente recurso de amparo.

Fundan su queja, en que no siendo el C. Lic. Agustín Clavería, Magistrado propietario, ni interino del Tribunal Superior, sino que pertenece á la clase de los suplentes cuya misión es tan pasajera que está reducida á ejercer jurisdicción en los pocos casos en que por impedimento temporal no pueden ejercer jurisdicción los propietarios é interinos, su ingreso al ejercicio del poder ejecutivo es una infracción notoria del artículo 69 de la Constitución del Estado y de varios del Pacto federal, entre los que citan el 89 y el 109; y por consiguiente, no era autoridad legítima para sancionar la ley que reclaman, y con cuya ejecución se viola la garantía que otorga el artículo 16 del mismo Pacto federal.

Además dicen, que esa ley es retroactiva porque grava las fincas de los quejosos, por lo que elaboraron antes de su promulgación, siendo así que la mayor parte nada tienen que elaborar y las demás solo tienen una pequeña parte.

Resuelto el punto de suspensión inmediata, que también solicitaron las administraciones de rentas de los Distritos en que están ubicadas las fincas, como autoridades inmediatamente ejecutoras de la ley reclamada, informaron aduciendo en sustancia las razones siguientes contra la providencia del amparo:

Primera: que los decretos de 21 de Abril y 6 de Mayo, eran una prueba de acatamiento al fallo pronunciado por la Corte Suprema en 11 de Abril.

Segunda: que la legitimidad ó ilegitimidad de las autoridades que funcionan, no está

TOMO VI. — PARTE II.

sujeta á la decisión de los tribunales federales, ni toca á estos calificarla.

Tercera: que aunque la Suprema Corte en la misma ejecutoria de 11 de Abril, declaró: que la Constitución del Estado no fué reformada conforme á sus propias prescripciones, en lo relativo á la reelección del Gobernador, esa declaración no podía bastar para que se tuvieran como existentes las reformas de esa Constitución, las que por otra parte fueron bien hechas, pues ante la Legislatura que comenzó á funcionar el 10 de Julio y concluyó el 15 de Setiembre de 1871, se presentó la iniciativa el 19 de Julio, y en 2 de Diciembre, la segunda Legislatura discutió y votó el dictamen de 30 de Noviembre, que consultaba la aprobación de esas reformas, quedando llenados así los requisitos del artículo 149 y conforme al 5 transitorio de la misma Constitución.

Cuarta: que por consiguiente, el artículo 69 que establece, que las faltas del Gobernador serán cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior ó por el Magistrado que haga sus veces, es válido y subsistente, y el Lic. D. Agustín Clavería que sancionó la ley, hacía legítimamente veces de Presidente del Tribunal Superior, cuando entró á sustituir al Gobernador.

Quinta: que por consiguiente, es gratuita la suposición de que el Presidente del Tribunal tenga precisamente que ser de elección popular, y al contrario, la Constitución del Estado, previó el caso de que faltaren todos los ministros propietarios.

Sesta: pero que aun admitiendo, sin conceder, que las reformas constitucionales fueron insubsistentes, un Magistrado suplente, conforme á la Constitución y leyes secundarias puede ser Presidente del Tribunal tanto los Magistrados propietarios como los suplentes, son constitucionales, el Tribunal puede estar formado solo de suplentes y el Presidente, cualquiera que sea, puede ser; Gobernador sustituto en un caso dado.

Sétima: que la Constitución primitiva no dice, que el Tribunal se forme de un Presi-

dente y dos Ministros, sino de tres Ministros, aunque el artículo 69 dice: que el Presidente sustituya al Gobernador, es por que supone, que el Tribunal, como todo cuerpo colegiado, ha de estar presidido por uno de sus miembros; y tan es Presidente un Ministro propietario, como un suplente; que el mismo artículo 69 no especifica, "Presidente constitucional" cuando habla de esa sustitucion, sino que se refiere á cualquier Presidente, y donde la ley no distingue, nadie tampoco puede distinguir. Y ademas, que como las faltas de los Ministros propietarios, solo han sido temporales, las han cubierto los suplentes y no se han nombrado Magistrados interinos.

Octava: que el ingreso del Sr. D. Agustin Claveria, al ejercicio del Ejecutivo del Estado, no pugna con los artículos 39 y 109 de la Constitucion federal, y es un error creer que las autoridades, para ser legítimas, deben ser nombradas popularmente.

Y sobre el punto de retroactividad: Primera: que segun la misma ley reclamada, tomando por base la anualidad, se fijaron las contribuciones correspondientes á los siete meses y medio desde el 16 de Mayo á 31 de Diciembre; pero los mismos quejosos reconocen en la cuenta que adjuntaron á su escrito, que no se les cobra la contribucion por todo el año.

Segunda: que si las cuotas impuestas á las fincas, son excesivas, no por eso la ley es retroactiva; los peticionarios pudieron reclamar en tiempo y no lo hicieron por no acatar la ley.

Y por último, que con la ejecucion de esta, no se violan las garantías invocadas, y por consiguiente no procede el amparo.

Abierto el recurso á prueba, los quejosos rindieron la que á continuacion extracto:

Presentaron: 1º: Un ejemplar de cada uno de los núms. 2, 43, 51 y 52 tomo III, y 22 y 78 tomo V del "Periódico Oficial" del Estado, correspondientes á los dias 7 de Julio y 1º de Diciembre de 1871, 2 y 5 de Enero de 1872, 30 de Setiembre de 1873

y 19 de Mayo de 1874, y que contienen la iniciativa, dictámen, discusion y aprobacion de las reformas constitucionales, la iniciativa y aprobacion del decreto que las mandó publicar, el decreto núm. 1 de 25 de Setiembre de 1873 que declaró ser Gobernador del Estado hasta el 30 de Setiembre de 1877 el C. General Francisco Leyva, y el decreto núm. 55 publicado por el Gobernador sustituto, Lic. Miguel Quiñones, en 15 de Mayo de 1874, de que ya hice referencia.

2º: Las boletas de la contribucion que se impuso á las fincas de los quejosos, en virtud de la ley reclamada; son iguales á las que se adjuntaron á los informes, y su monto se hace constar á continuacion en un cuadro comparativo de todas las presentadas.

3º: Varios certificados, de los que aparece, que la hacienda de San Gaspar concluyó su clovoracion de azucar el 17 de Abril; que la de Tenango tenía el 15 de Mayo solo doscientas dos tareas de caña molidera; que en la de Santa Clara hasta la misma fecha, quedaron nueve machuelos caña molidera, que hacen cuatrocientas cincuenta tareas; que hasta la misma fecha la hacienda del Puente tenía solo cuarenta tareas; que la hacienda del Hospital concluyó su molienda el 14 de Mayo; que en la de San Vicente las turbinas estaban desarmadas, y no se ha elaborado antes, ni se elaboraba por ese sistema, hasta el 27 de Mayo; que la de Chiconcuac acabó de moler el 9 de Mayo, no le quedó caña, y solo tiene plantilla para el año de 1875; que en la de Temisco terminó la zafra en 25 de Abril; que en 16 de Mayo, la de San Vicente solo tenía doscientas tareas de caña molidera; que la de San Carlos tenía en 15 de Mayo únicamente seiscientas una tarea, trece surcos caña molidera, y quinientas treinta y cuatro tareas veintidos surcos, soca molidera; que la misma hacienda suspendió su molienda, y está clausurada desde 16 de Mayo; que en 15 de Mayo, el Administrador de la misma, manifestó á la oficina recaudadora

de Rentas de Yautepec, que se clausuraba la hacienda; que el 17 del mismo Mayo, el Presidente municipal de Yautepec remitió al Ayudante de San Carlos un ejemplar del decreto núm. 25, para que lo fijara en la hacienda; que la de San Gaspar concluyó su molienda 6 elaboración el 17 de Abril, y en 19 de Mayo no tenía caña molidera sino plantilla para el año entrante; y por último, una información de la que aparece también, que la hacienda de Zacatepec comenzó su molienda la primera semana de Diciembre de 1873, y concluyó la segunda semana de Abril del presente año, elaborando en ese periodo treinta y tres mil panes.

4º: Una memoria de hacienda, de 1872, en la que constan las cuotizaciones definitivas que tuvieron las mismas fincas, con las que adelante se hacen constar en un estado comparativo.

5º: Tres testigos por cada una de la haciendas, escepto la de Tenango por la que se presentaron solo dos, quienes conforme al interrogatorio exhibido para su examen, declararon, que D. Ramon Portillo y Gomez explota por su cuenta la hacienda de San Gaspar, y en ella acabó la molienda el 17 de Abril; que el mismo Sr. Portillo posee la hacienda del Puente, donde concluyó la molienda el 15 de Mayo, quedando solo cuarenta tareas de caña molidera; que D. Isidoro de la Torre posee la de San Carlos, concluyó en ella la molienda el 15 de Mayo, y sólo quedaron seiscientas tareas caña molidera y quinientas treinta y cuatro de soca; que los Sres. García Icazbalceta Hermanos poseen la hacienda de Tenango, en la que el 15 de Mayo solo había doscientas tareas caña molidera; que los mismos Sres. García Icazbalceta poseen la de Santa Clara, la que en 15 de Mayo solo tenía cuatrocientas cincuenta tareas de caña; que D. Pio Bermejillo posee la de Chiconcuac, y en ella acabó la molienda á principios de Mayo; que el mismo Sr. Bermejillo posee la de Temisco, que acabó su elaboración á fines

de Abril; que el mismo Sr. posee la de S. Vicente, en la que no se ha elaborado azucar de turbina, y en 15 de Mayo solo tenía doscientas tareas de caña molidera; que D. José Toriello Guerra posee la del Hospital, y en esta acabó la elaboración el 14 de Mayo; y por último, que D. Alejandro Arenas posee la de Zacatepec, donde terminó la molienda antes del 15 de Mayo.

6º: Las boletas de cuotizaciones conforme á las leyes de 12 de Octubre de 1873 y 21 de Abril del presente, remitidas por la Direccion general de rentas, y cuyo monto se compara despues.

7º: Dictámen de los peritos CC. Pedro Cadilla y Jacinto Cárdenas, este último nombrado por el representante de los quejosos y el primero por el que suscribe, segun el que por la diversa calidad de los terrenos, por término medio de las circunstancias de cultivo y demás relativos, cada tarea de caña plantilla molidera produce quince panes de azucar en las haciendas de San Carlos, San Vicente, Santa Clara y Zacatepec, y doce en las de San Gaspar, el Puente, Tenango, Chiconcuac, Temisco y el Hospital; la soca, en todas produce por término medio, siete panes por tarea; por cada pan de azucar, se obtiene arroba y media de miel; y por término medio, cada pan de azucar, pesa de veintidos á veintitres libras.

8º: Oficio de remision y copia del acta de nombramiento del C. Lic. Agustín Clavería para Magistrado suplente, remitidos por el Tribunal de Justicia del Estado.

El oficio fecha 3 de Julio expresa, que esa Superioridad (?) no reconoce obligacion de remitir al Juzgado de Distrito la copia del acta, caso de que la remision entrañe que se califique la legitimidad de alguno de sus miembros, y estando firme el Tribunal en el sentir de la soberanía de los Estados y en el de que la concesion del amparo seria un procedimiento anticonstitucional, la remite con salvdades.

Del acta aparece, que reunidos en acuerdo pleno extraordinario, en 2 de Enero de

1874, los CC. 2º Magistrado Vicente Rodríguez Villanueva, 3º Miguel Quiñones, y Fiscal Refugio de la Vega, se nombraron magistrados suplentes por unanimidad, á los CC. Lics. Agustín Clavería, Manuel Argumedo, Bernardo Gallegos y José de la Luz Barrales; y se acordó: "Comuníquese al Congreso, al Gobierno y á los interesados."

Para la comparacion de las diversas cuotizaciones que con ese objeto se han presentado en este recurso, y para que el Juz-

gado tenga á la vista facilmente todos los datos que existen en el expediente, en el primer cuadro ó estado de los dos que siguen, se exhibe el monto de todas las cuotizaciones de que se ha hecho mencion, y en el segundo está calculado, segun el dictámen de los peritos, el producto de la caña moledora que tonian las haciendas al publicarse la ley que se reclama, bajo el concepto de que la tarea de campo á que se refiere ese dictamen, tiene veinticinco surcos.

NUMERO 1.

VALORES QUOTIDIANOS.

HACIENDAS.	Conforme á la ley de 10 de Noviembre de 1871.		Conforme á la ley de 12 de Octubre de 1878.		Conforme á la ley de 21 de Abril de 1874.		Conforme á la ley de 6 de Mayo de 1874.	
	AZUCAR.	MIEL.	AZUCAR.	MIEL.	AZUCAR.	MIEL.	AZUCAR.	MIEL.
El Puente.....	@ 20,002	@ 33,999	@ 25,000	@ 42,613	@ 25,000	@ 42,613	@ 40,000	@ 68,180
San Gaspar.....	20,002	33,999	24,000	41,000	24,000	41,000	38,400	65,600
San Carlos.....	48,000	72,000	55,000	82,500	55,000	82,500	88,000	132,000
Tenango.....	62,000	105,681	45,000	91,000	45,000	91,000	72,800	145,600
Tenisco.....	26,000	39,000	30,000	50,000	30,000	50,000	48,000	80,000
Chicomeac.....	81,000	17,488	21,600	36,700	21,600	36,700	34,560	58,720
San Vicente.....			20,000	40,000	20,000	40,000	32,000	64,000
El Hospital.....	21,000	42,000	25,000	50,000	25,000	50,000	40,000	80,000
Zacatepec.....	30,976½	44,484½	31,976	47,964	31,976	47,964	51,161	76,742
Santa Clara.....	35,722	60,893	22,000	44,000	22,000	44,000	35,200	70,400

Estas cotizaciones estan comprobadas por los documentos presentados, y en las boletas de las que corresponden á la ley de 21 de Abril, hay la siguiente:

NOTA.—Los causantes comprendidos, [ó estando V. comprendido] en el art. 2º del Decreto nº 42, pagarán doble los cuatro meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

NUMERO 2.

«H»

Las diez Haciendas tenían en 15 de Mayo, y su caña existente produce según el dictamen de los peritos.

HACIENDAS.	TAREAS DE		AZUCAR.		
	Plantilla.	Soca.	Panes.	Arrobas.	Miel.
El Puente.....	0	0	480	432	@ 720
San Gaspar.....	0	0	0	0	0
San Carlos.....	600 y 12 surcos	534 y 22 surcos	12,751	11,47123lb	19,126½
Tenango.....	202	0	2,424	2,18115lb	3,636
Temisco.....	0	0	0	0	0
Chiconcuac.....	0	0	0	0	0
San Vicente.....	200	0	3,000	2,700	4,500
El Hospital.....	0	0	0	0	0
Zacatepec.....	0	0	0	0	0
Santa Clara.....	450	0	6,750	6075lb	10,125

He creído conveniente hacer esta, si bien cansada, sucinta relación de los hechos y constancias de autos, para que el Juzgado y la Suprema Corte en su caso, decidan en este recurso con el mas pleno conocimiento posible y para dar á mi alegato mayor claridad, evitando en el estudio de las cuestiones de derecho, el exámen interumpido y frecuente de esos hechos y constancias.

Creo que en las gestiones del empleo que desempeño, debén hacerse solo las consideraciones jurídicas indispensables, y no quiero calificar, ni las protestas hechas por los poderes del Estado, y que las autoridades informantes llaman enérgicas, ni el repetido y frecuente cambio de leyes de Hacienda y Gobernadores sustitutos, ni los actos que las autoridades informantes llaman prueba de acatamiento á la ejecutoria de 11 de Abril, ni por último, si los quejosos promovieron este amparo con el objeto de hacer la oposicion al Gobierno actual. En el exámen de las cuestiones de derecho, evitaré

cuanto pueda hacer, esa calificación, y apartando las circunstancias de lucha política que son ajenas de este recurso, y que el Juzgado no debe atender, entro desde luego en el exámen de aquellas cuestiones, sin inquirir tampoco el resultado ulterior que pueda tener su resolución en cualquiera sentido.

La prolongada discusión de la ejecutoria de 11 de Abril, en que tan prolijas y extensas razones se han aducido sobre la cuestión de si la incompetencia de origen llamada absoluta, es decir, la ilegitimidad de las autoridades, es causa de violación de la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución, me releva de entrar en la de si los Tribunales federales pueden calificar la ilegitimidad de las autoridades, en los recursos de amparo. Yo que desde mis primeros, en el que se pronunció aquella ejecutoria, sostuve la afirmativa, he venido á tener una convicción bien arraigada por esa discusión, y por las resoluciones de la Supre-

ma Corte, hasta el grado de que no solo creo que la incompetencia por ilegitimidad está comprendida como éualquiera otra en la prohibicion del artículo constitucional citado, sino que era indispensable que lo estuviese, para que el recurso de amparo tuviera una estension eficaz y bastante para salvar los derechos individuales, y hacer prácticas las garantías constitucionales; y lejos de que se ataque la soberanía de los Estados subvertiendo el sistema con el juicio de legitimidad de sus autoridades, esa soberanía queda garantizada en los términos del pacto federal, al abrigo de usurpaciones; el sistema se afirma llenando su objeto que es la inviolabilidad de los derechos del hombre y se asegura tambien la soberanía del pueblo.

Repetir ahora las razones que se han hecho valer en esa discusion, sería inútil, y para mí sería tambien espuesto que procurase ampliarlas. Sin embargo, creo necesario hacer la observaciones siguientes: 1ª: Que cuando antes no se habia hecho alarde de la soberanía de los Estados, sin embargo de que algunas veces el Gobierno general ha influido aun en su elecciones locales y casi decidido de sus destinos, malos deben ser los títulos de legitimidad de las autoridades sobre cuya competencia se trataba de decidir, puesto que no han vacilado en hacer al poder judicial de la Federacion, el infundado cargo de abrigar tendencias centralizadoras. 2ª: Que á diferencia del poder Ejecutivo en el que la ampliacion de facultades tiende siempre al despotismo, la mayor estension de las del poder judicial conduce á garantizar mejor los derechos, la vida y los intereses mas caros de los individuos; y 3ª: Que por sus respetables ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia tiene resuelta esa cuestion, especialmente por la de 11 de Abril tantas veces citada.

En el concepto, pues, de que los tribunales federales pueden y deben en casos como el presente, inquirir y resolver sobre la legitimidad de las autoridades, examinemos

la del C. Agustín Clavería, Gobernador sustituto del Estado.

La Constitucion particular del mismo, estableció primitivamente en su artículo 69, que las faltas temporales del Gobernador, cuando no excedieran de seis meses, serian cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior, y si excedieran, por el individuo que nombrase la legislatura, que si estaba en receso cuando ocurriera la falta, sería convocada para los efectos de este artículo. En la nueva Constitucion promulgada en 5 de Diciembre de 1871, ese mismo artículo aparece reformado en los términos siguientes: "Las faltas temporales del Gobernador seran cubiertas por el Presidente del Tribunal Superior, ó por el Magistrado que haga sus veces." Los quejosos citan y se atienen al primero, y las autoridades informantes sostienen el segundo reformado; veamos pues si la reforma de ese artículo fué buena porque llenara los requisitos prevenidos por la misma Constitucion.

En su artículo 149, establece: "Esta Constitucion puede ser adicionada ó reformada; pero para ello se observarán los requisitos que establecen las fracciones siguientes: 1ª: La reforma ó adicion propuesta, solo será admitida á discusion si estuviesen por la afirmativa dos tercios de los diputados presentes. 2ª: La Legislatura en cuyo periodo se proponga la adicion ó reforma, se limitará á declarar, que merece sujetarse á discusion y la mandará publicar, en el periódico Oficial, reservando su deliberacion, á la Legislatura próxima siguiente. 3ª: Para que esta la apruebe y forme parte de la Constitucion, se requiere el voto de dos tercios de los diputados presentes.

En 1º de Junio de 1871, el C. Diputado Ramon A. Montañéz, presentó á la Legislatura una proposicion que textualmente dice:

Unica.—Son reformables, el artículo 31, fraccion IV del artículo 45, el artículo 48, el cap. 1º tít. IV; la fraccion 1ª del artículo

77; el 87 y el 128 de la Constitución del Estado.

El artículo 69 que nos ocupa está comprendido en el cap. 1º tit. 4º de la Constitución y á esa proposición recayó el siguiente acuerdo de la Legislatura:

Guernavaca, Junio 1º de 1871.—Aprobada y se mandó pasar para su resolución al Congreso venidero, mandándose copia al Ejecutivo para su publicación, conforme á la fracción 2ª del artículo 149.

¿Pero se cumplió con el requisito que establese la fracción 1ª de este último artículo? ¿Puede decirse que el C. Montañez propuso realmente las reformas constitucionales? ¿Expresó acaso, como proponía, que quedaran reformados los artículos á que se refiere su iniciativa? Indudablemente no; se limitó á decir y proponer respecto de esos artículos, lo que ya estaba declarado por la Constitución, es decir, que podía ser adicionada ó reformada; pero las reformas no se especificaron, y por consiguiente esas reformas no fueron propuestas. Y tan es verdad que la segunda Legislatura, es decir, la instalada el 16 de Setiembre de 1871, no se guió por esa proposición, que en la sesión del 20 de Setiembre de 1871 se mandó pasar á las comisiones unidas de puntos constitucionales y legislación, no solo la proposición *única* del C. Montañez, sino estas otras dos que se le agregaron: “2ª: La fracción IX del artículo 45 de la Constitución, quedará en estos términos: “Conceder ó denegar indultos ó amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca á los tribunales del Estado; pero solo concederá la gracia de indulto á los reos á quienes se haya condenado á sufrir la pena capital por sentencia que cause ejecutoria, en los casos y de la manera que determine la ley orgánica respectiva,” y 3ª: El artículo 30 quedará en estos términos: “Por cada 18.000 habitantes, ó por una fracción que exceda de 9.500, se elegirá un diputado propietario, y por cada diputado propietario se nombrará un suplente.”

Procediendo pues esa misma Legislatura á discutir y votar las reformas constitucionales, infringió la fracción 2ª del artículo 149, porque hasta en uno de sus periodos vinieron á proponerse en el dictámen de las comisiones, y antes, ni el C. Montañez había propuesto la de los artículos á que se refiere su exposición de 1º de Junio, y nadie propuso las del artículo 30, ni de la fracción IX del artículo 45.

En la sesión de 1º de Diciembre, se dió cuenta con el dictámen de las comisiones, y se discutió el mismo dictámen; y en la de 2 de Diciembre se votaron las reformas, quedando aprobada la del artículo 69, por unanimidad.

Por consiguiente, esa reforma no debe considerarse válida ni subsistente, supuesto que al hacerla, no se llenaron los requisitos establecidos por la misma Constitución.

Es verdad que la consideración de la ejecutoria de 11 de Abril, según la que no era buena la reforma constitucional relativa á la reelección del Gobernador, no puede entenderse á tener por decidido que tampoco fué buena la que ahora examinamos. El artículo 102 del Pacto federal, establece, que en los recursos de amparo se limitarán los tribunales federales á proteger y amparar á individuos particulares sin hacer declaraciones generales; pero en aquel caso, hubo las mismas razones de consideración, y en esto la prueba es la misma que entonces se rindió y consiste en documentos auténticos; por lo que debe decidirse igualmente.

“Que está probado bien y cumplidamente, que la reforma del artículo constitucional relativo, no se hizo de la manera que la misma Constitución previene.”

Por otra parte, el artículo 102 de la Constitución del Estado, dice: “El Tribunal de Justicia se compondrá de tres ministros y un fiscal propietarios, y otros tantos suplentes que cubran las faltas de aquellos.”

Establece que los suplentes (artículo 104) serán nombrados al principio de cada año por el propio Tribunal; y entre las facultades

des del Congreso, fija, (Fracción XVII artículo 45,) la de nombrar ministros interinos del Tribunal Superior de Justicia, en las faltas absolutas de los electos popularmente, mientras se procede á nueva elección.

De manera que en el Estado, puede haber tres clases de ministros del Tribunal: los propietarios electos popularmente; los interinos nombrados por la Legislatura, y los suplentes que al principio de cada año nombra el propio Tribunal; pero como se dice en el escrito de queja, los suplentes tienen una misión muy temporal que está reducida á ejercer jurisdicción en los casos de impedimento pasajero de los ministros propietarios ó interinos.

Efectivamente, la Constitución del Estado, para el caso en que las faltas de los Ministros propietarios puedan prolongarse, estableció que la Legislatura nombrase Ministros interinos.

¿Puede suponerse que un Ministro suplente llague á sustituir al Gobernador?

En primer lugar, el mismo artículo 102 de la Constitución del Estado, limitó la misión de los suplentes á cubrir las faltas de los Ministros propietarios, solo para ejercer jurisdicción en algunos casos, y muy temporalmente. Solo los Magistrados interinos pueden sustituir á los propietarios en todas sus atribuciones y mientras tanto se procede á nueva elección. Pero para sustituir al Gobernador, es decir, para que en todo caso el poder público este en manos de los funcionarios electos ó nombrados por el pueblo, los Ministros suplentes no pueden ser considerados como constitucionales. Es verdad que tanto los unos como los otros fueron instituidos por la Constitución; pero su misión constitucional es bien diversa: la de los Ministros suplentes se reduce á sustituir temporalmente á los propietarios ó interinos, y la de estos á cubrir las faltas del Gobernador, que no excedan de seis meses; pero no hay prevención alguna constitucional que invista á los suplentes de los Magistra-

dos, con el carácter también de suplentes del Gobernador.

Las comisiones unidas de puntos constitucionales y legislación, al proponer la reforma del artículo 69, decían en la parte expositiva de su dictámen: El actual Ejecutivo del Estado, al observar el proyecto de Constitución, decía acerca de este artículo las siguientes palabras, que las comisiones dictaminadoras las adoptan y las hacen suyas.

“El Ejecutivo entiende, que para la conservación de la paz pública, es sumamente importante que los depositarios de los diversos poderes del Estado, esten profijados de antemano por la ley, previendo todas las eventualidades, y á fin de cerrar las puertas á todas las aspiraciones bastardas durante los periodos designados por la Constitución, para la duración de los poderes; y para ello es conveniente que esté determinado por la ley, no solo la manera de suplir al Gobernador en sus faltas temporales, sino también la persona moral, esto es, la autoridad que deba remplazarlo, pues presta mas garantías á la sociedad que el que supla tales faltas sea un funcionario constitucional, que cualquiera otra persona nombrada nuevamente por el Congreso y para un tiempo tal vez muy corto, ya porque esta circunstancia le priva del estímulo, y ya también porque se pueden crear aspiraciones contrarias á la paz pública, que á toda costa deben procurar los Gobernantes conservar.”

“En efecto, Señor, desde el momento en que se consigne que aun durante los periodos constitucionales pueda haber cambio de los altos depositarios del poder, aunque sea bajo el carácter de faltas temporales, pudiendo entrar cualquiera persona con tal que consiga la mayoría de votos en el Congreso, la oposición que justa ó injustamente existe en todas las sociedades, concibe la esperanza próxima que legalmente debía reservar para los periodos electorales; y anticipándose á ellos, convierte en armas de partido la oportunidad que se le presenta; la

cuestion será hacerse de unos cuantos diputados, y hecho esto entablar una acusación aunque sea indebida, para hacerse del poder colocando por asalto á su candidato lo cual sería falscar las instituciones, *que exigen la elección del pueblo, para el nombramiento de sus gobernantes*, y no el capricho de una mayoría parlamentaria que no por serlo ha de ser infalible ni exenta de pasiones.

“Es un error creer, que la soberanía está en el Congreso: ella reside exclusivamente en el pueblo, quien la ha resignado en parte en los tres poderes; pero reservándose la principal, que es la facultad electoral; y si esta le quitamos, ¿que le queda entonces al pueblo de soberano? Nada mas que un título vano y ridículo, que de nada le serviría, supuesto que nunca llegaría á ejercerlo. Pues bien, de la manera que está concebida la segunda parte del artículo de que nos estamos ocupando: sucederá ese mal, el pueblo se convertirá en rey de burlas, los periodos constitucionales serán inútiles, y el poder Ejecutivo estará á disposición del primer intrigante que tenga la astucia suficiente para pretender escalarlo.”

“No sucederá ciertamente esto, si un funcionario público como el Presidente del Tribunal Superior, es el designado para cubrir todas las faltas temporales del Gobernador, ni se prestará tan fácilmente á servir de instrumento de partido, y vendría á ese punto cuando naturalmente lo llamara la ley.”

Y bien, ¿no obran en nuestro caso las mismas consideraciones; no son aplicables las mismas frases, al peligro de que el Gobernador sea suplido por un individuo nombrado por el Tribunal para otro objeto, y por un tiempo todavía mas corto? ¿Ahora como antes, no exigen las instituciones la elección del pueblo para el nombramiento de sus gobernantes?

Y no es verdad que los funcionarios constitucionales, sean lo mismo que los suplentes; en la Constitución, en el dictámen que

acabamos de ver, en las leyes, y aun en el sentido comun, los funcionarios constitucionales, se mencionan en contraposición de los suplentes; y respecto de los Ministros, los interinos funcionan mientras se procede á nueva elección, y los suplentes solo de una manera transitoria.

El artículo 39 del Pacto Federal, establece que todo poder público, dimana del pueblo, y no interviene por cierto la voluntad ni el nombramiento popular, ni aun indirectamente, en el caso de que un Ministro suplente del Tribunal se encargue del poder Ejecutivo. Los suplentes como hemos visto, son nombrados por el mismo Tribunal; pero solo para ejercer jurisdicción en los pocos casos de impedimento pasajero de alguno de los Ministros propietarios.

No es verdad que la Constitución del Estado haya previsto, como no previó, el caso de que faltaran todos los ministros propietarios, y el Tribunal se formara solo de suplentes, pudiendo alguno de estos ser llamado á cubrir las faltas del Gobernador; ella quizo, que siempre que faltara de una manera absoluta alguno de los ministros, se procediera cuanto antes á nueva elección, y cuando faltara por un tiempo indefinido ó algo prolongado, se nombrara ministro interino, dejando á los suplentes, como he repetido, una misión enteramente transitoria y violenta.

Pero todavía se convence uno mejor de que no fué previsto ese caso, fijándose, en que segun el artículo 102, solo puede haber y solo pueden nombrarse tres ministros suplentes; si pues alguno puede ser llamado á suplir al Gobernador, el Tribunal queda acéfalo, ó no se encontrará provencion constitucional que justifique el nombramiento de un cuarto ministro suplente, supuesto que conforme al mismo artículo, el Fiscal no tiene el carácter de ministro. Si el suplente que funja de Gobernador interino, despacha á la vez como Presidente del Tribunal, se violaría el tít. 2º de la misma Constitución, que despues de establecer la división de

poderos, dice. "No podrán reunirse estos poderes ni dos de ellos, en una sola persona ó corporacion."

Por consiguiente, como para que un ministro suplente llegue á presidir el Tribunal, es indispensable que este se componga solo de suplentes, no puede admitirse que en ese caso el Presidente cubra las faltas del Gobernador, sin que resulte acéfala la administracion en cualquiera de sus ramos. La Constitucion pues, al prevenir que el Presidente del Tribunal cubriera las faltas temporales del Gobernador, no se refirió á cualquier Presidente, como se dice en uno de los informes; y si no deben hacerse distinciones donde la ley no las establece, tambien es cierto que los diversos artículos de la misma ley, se esplican los unos para los otros, y no deben admitirse contradicciones ni absurdos en ella, cuando por la misma ley pueden facilmente coordinarse sus diversas disposiciones.

El artículo 109 de la Constitucion federal, garantiza para el régimen interior de los Estados, la forma de Gobierno republicano, representativo popular, y una de las bases de ese sistema, establecida por el artículo 39 del mismo Código, consiste en que todo poder público debe ser emanacion del pueblo; y todavía el artículo 41 especifica que el pueblo ejerce su soberanía en lo que toca al régimen interior de los Estados, conforme á las Constituciones particulares de los mismos. Es pues circunstancia esencial de la forma de Gobierno, que los Estados deben adoptar y seguir, el que los poderes públicos dimanen del pueblo y se ejerzan conforme á las Constituciones particulares. Y ya hemos visto que el pueblo no ha intervenido directa ni indirectamente en la comision que para ejercer el poder Ejecutivo del Estado desempeñaba el Lic. Agustín Clavería cuando se publicó la ley reclamada, y por último, la que ejercía este Señor que debiera ser la expresion genuina de la soberanía popular, era anticonstitucional y por lo mismo extralimitaba los poderes conferidos por el pueblo.

Queda pues sentado, que la reforma de artículo 69 de la Constitucion del Estado, no es válida ni debe considerarse subsistente; que el mismo artículo al establecer, que el Presidente del Tribunal cubriría las faltas del Gobernador que no pasaran de seis meses, no se refirió á cualquier Presidente, y que con el ingreso de un Magistrado suplente al ejercicio del poder Ejecutivo, resulta acéfala la administracion, y sobre todo el sistema de Gobierno.

Las autoridades reformantes admiten sin conceder, que la reforma del artículo 69 de la Constitucion del Estado no fuese válida, y dicen que aun entonces el Tribunal podia alguna vez estar formado solo de ministros suplentes, y entonces un Magistrado suplente podia ser presidente del Tribunal. Creo haber probado los términos de ese supuesto, y no encuentro dificultad alguna en esas aseveraciones. El Tribunal puede alguna vez estar compuesto solo de ministros suplentes y ser presidido por uno de ellos, porque la Constitucion confiere á los suplentes la misión de cubrir las faltas temporales y pasajeras de los ministros propietarios, y advierte, que ni aun en el caso de falta absoluta de estos ministros, puede el Tribunal formarse solo de suplentes. Pero agregan, que entonces el Presidente, cualquiera que sea, puede ser Gobernador en un caso dado; y yo creo haber probado tambien, que si formado el Tribunal solo de suplentes ocurre la falta del Gobernador, quedará necesariamente acéfala la administracion y el cometido de aquellos no se estiende á suplir al Gobernador en ningun caso.

En ese supuesto, dicen todavía, que la Constitucion primitiva no establece que el Tribunal se forme de un Presidente y dos ministros, sino que supone que todo cuerpo colegiado ha de estar presidido por algunos de sus miembros, y tan Presidente puede ser un ministro propietario como un suplente, y restringiéndose al caso presente, que como las faltas de los propietarios solo han sido temporales, las han cubierto los su-

plentes, y no se han nombrado ministros interinos.

Como caminamos en el supuesto admitido de que la reforma constitucional no es válida, no creo necesario inquirir por qué se cuidó de añadir al artículo 69 que designaba al Presidente del Tribunal para suplir las faltas del Gobernador la frase, "*o por el magistrado que haga sus veces*"; pero sí debo advertir, que aunque la Constitución no hizo especial mención del Presidente en el artículo 102, en otros artículos como el 69, se refirió expresamente á él la ley orgánica de tribunales, estableció como debían los magistrados sucederse en la presidencia del Tribunal, y según la convocatoria para elecciones de ministros, el pueblo los nombró por su orden y bajo el concepto, de que al primer Magistrado correspondía presidir el Tribunal, y sucesivamente al segundo y tercero: de manera que es de suponerse, que aun el pueblo tuvo presente en la elección de esos ministros, no solo el orden en que presidieran el Tribunal, sino en el que debieran suplir al Gobernador.

Ahora bien, no puede admitirse que en el sentido de esos informes, pueda un ministro suplente tener la misma misión que los magistrados propietarios. Yo no encuentro dificultad en que para un caso dado, el Tribunal compuesto solo de ministros suplentes esté presidido solo por uno de ellos; pero ya hemos visto que la Constitución no llama á estos para que suplan al Gobernador.

Respecto del último punto, no creo necesario examinar si para integrar el Tribunal, en nuestro caso eran ó no de nombrarse ministros interinos; pero ignoro si la falta del segundo Magistrado es de tal manera temporal, que conforme á la Constitución baste para cubrirlo un suplente.

Por lo expuesto se vé, que está acéfala la administración del Estado, y subvertido por consiguiente, el orden constitucional: con impedimento ó sin él por cualquiera causa, el Gobernador propietario no desem-

peña su cometido, faltan los Magistrados propietarios primero y segundo, falta también el primero interino, y cuando se separa el tercer Magistrado, como ha sucedido, un ministro suplente funge de Gobernador, y otros tres integran el Tribunal, de manera, que hay cuatro ministros suplentes, siendo así que la Constitución establece, que solo se nombren tres y un suplente del Fiscal que no puede fungir como ministro.

Según el acta de nombramiento de esos suplentes, remitida por el Tribunal, aparece que en 2 de Enero se nombraron para magistrados suplentes á los CC. Licenciados Agustín Clavería, Manuel Argumedo, Bernardo Gallegos y José de la Luz Barrales.

¿Quien de esos cuatro Señores fué el nombrado de mas, y por consecuencia articonstitucionalmente? ¿Se dió que alguno fué nombrado como suplente del fiscal?

Pero es público y notorio que en la actualidad, el Sr. Lic. Quiñones suple al Gobernador y no funciona el C. Lic. Agustín Clavería el Tribunal se forma de los otros tres suplentes.

Y de esa acéfalia, así como de la ya repetida discusión sobre legitimidad de los Gobernadores del Estado, malamente puede culparse á los Tribunales de la federación, porque estos tienen que resolver siempre en justicia, desatendiéndose de las consecuencias ulteriores de su fallo en cualquiera sentido.

He examinado la cuestión de legitimidad del C. Agustín Clavería como Gobernador que sancionó la ley reclamada, únicamente bajo el punto de vista que la propusieron los quejosos, sin hacer mérito de las otras razones manifestadas *extra litis* ya por el Sr. Rodríguez Villanueva, en su manifiesto de que antes hablé, ya también de las otras que se desprenden de los documentos que obian en estos autos. Efectivamente, del acta del nombramiento de los ministros suplentes, aparece que fueron nombrados en acuerdo pleno formado solo por los ministros propietarios CC. Rodríguez Villanueva y Qui-

Bones y C. Fiscal propietario Refugio de la Vega; y aunque para otro caso el artículo 111 de la Constitución del Estado, dice: "Para los efectos de los artículos anteriores, se entiende por Tribunal pleno, la reunión de *todos* los Magistrados propietarios incluso el fiscal ó quien haga sus veces, y *uno al menos de los Magistrados suplentes*."

La misma acta como instrumento auténtico prueba, que el C. Agustín Clavería es sólo ministro suplente del Tribunal; y de lo dicho hasta aquí se infiere que no era Gobernador legítimo del Estado, único que conforme á la Constitución, debe promulgar las leyes (artículo 76 fracción 1ª), cuando sancionó la de 6 de Mayo que ahora se reclama; y que con la ejecución de esta que origina molestias á los quejosos en sus posesiones, se viola la garantía que les asegura el artículo 16 del Pacto federal.

Respecto de la retroactividad que se atribuye á la misma ley de 6 de Mayo, se dice en los informes con justificación, que las fincas fueron cuotizadas por las cantidades de azúcar y miel que elaborasen en un año, y tomando por base la anualidad, se asignó la contribución correspondiente á los siete meses y medio que hay del 16 de Mayo al 31 de Diciembre. Pero las leyes no solo son retroactivas porque su ejecución se refiera á un tiempo anterior al en que se publicaron. Es un principio de derecho sancionado por el artículo 14 de la Constitución federal que solo están bajo el dominio de la ley los hechos futuros y de ninguna manera los pasados; de otro modo, los individuos no tendrían seguros ni sus derechos ni sus intereses, no habría tranquilidad posible, ni trabajo ó industria que pudiera emprenderse. La ley que nosotros venimos examinando, al fijar los impuestos para cubrir el presupuesto del Estado durante los mismos siete meses y medio estableció los siguientes: "Artículo 2º fracción 1ª: cuatro centavos por cada arroba de azúcar que se elabore en los ingenios sirviéndose del sistema común.

Y 2ª: doce centavos y medio por cada arroba de miel panela ó panelon que se convierta en azúcar por el sistema de turbinas, y ocho centavos por cada arroba de miel panela ó panelon que no se emplee en dicho sistema."

De manera, que se gravó la elaboración que se hiciera en los ingenios de azúcar y miel, desde el 16 de Mayo hasta el 31 de Diciembre, época fijada por esa ley para que se causaran los impuestos mencionados; y para mejor explicación, el artículo 4º de la misma previno: "Los Administradores ó encargados de ingenios en cada Distrito, designarán de común acuerdo cual es la cantidad que sea de elaborarse en sus respectivas fincas, y presentarán al Administrador de rentas antes del 10 del presente, una manifestación colectiva por triplicado y en papel simple, en que conste con toda claridad, 1º: El nombre y dueño de la finca; y la cantidad de azúcar, miel panela ó panelon que elaboren en cada ingenio del Distrito."

La elaboración de azúcar en los ingenios, comienza el mes de Enero de cada año, y apenas habrá uno que otro en que se comience á moler el mes de Diciembre; y los quejosos han probado en este recurso, que en todos los de su propiedad concluyó la zafra antes del 15 de Mayo último. Las leyes de hacienda se han expedido casi siempre á la conclusión de cada año, para que rijan desde el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre del año siguiente; de esa manera, el impuesto sobre elaboración de azúcar y miel se causa durante la zafra posterior á la expedición de la ley, y esta fija para su pago los plazos correspondientes á las doce mensualidades del año. Y tan es cierto que esa contribución no se causa en cada uno de los doce meses del año independientemente de que haya ó no zafra, que se cuotiza á los ingenios calculando las cantidades que elaboren, y el artículo 3º de la ley de 21 de Abril, autorizó al Ejecutivo para alterar los plazos designados para el cobro

de ese impuesto, en la ley de 12 de Octubre, tomando por base las exigencias del Erario del Estado, y la mas perfecta equidad.

En nuestro caso, los quejosos no hicieron la manifestacion prevenida en el artículo 4º de la ley de 6 de Mayo y fueron cuotizados por lo que en sus ingenios era de elaborarse en un año, y tomando por base la anualidad se fijó la cuota correspondiente á los siete meses y medio de la ley, conforme al artículo 5º de la misma.

En un año completo, si hay elaboracion; pero siendo así que del 16 de Mayo al 31 de Diciembre nada se elabora. ¿cual zafra de los ingenios es la que se gravó?

No la de 1875, porque como la ley de que nos ocupamos solo regirá hasta el 31 de Diciembre del año que cursa, otra nueva ley se encargará de fijar los impuestos correspondientes á aquella. Luego se cuotizó y cobró el impuesto á los ingenios, por la elaboracion de este año que estaba concluida con cuando se publicó la ley, segun las pruebas rendidas en este recurso. Efectivamente, concedido á los mismos quejosos el amparo de garantías que solicitaron contra la ley de 12 de Octubre, para acatar la ejecutoria de la Corte, segun dicen las autoridades informantes, se derogó aquella ley expidiéndose en su lugar la de 6 de Mayo que ahora se reclama; esta impuso de nuevo las contribuciones mismas que habia fijado la de 12 de Octubre; pero sin atender á que el tiempo no era el mismo, ni las contribuciones sobre elaboracion podian gravar las zafras ya terminadas.

El objeto que por otra parte se trató de conseguir con las leyes posteriores á la publicacion de la ejecutoria de 11 de Abril, fué el de que los peticionarios de aquel amparo, no tuvieron libre su última zafra, ni dejarán de pagar siquiera en parte las contribuciones impuestas sobre ella: así lo manifestó el artículo 2º de la ley de 21 de Abril, que dice: "Los contribuyentes que por cualquier motivo no hubieren pagado

contribucion en lo que va corrido del año fiscal hasta la fecha de la presente ley, para igualarse con los demas contribuyentes del Estado, pagarán doble durante cuatro meses la cuota que se les asigne conforme á las prescripciones de la ley citada. ¿Y puede admitirse que porque la ley dada en tiempo no tuviera ejecucion por anticonstitucional sobre las negociaciones de los quejosos, otra posterior grave sus productos ya percibidos?

La elaboracion en esos ingenios, esta probado que concluyó antes del 15 de Mayo en que la ley reclamada comenzó á estar vigente; y aunque tomando por base la anualidad, solo se les cobra una parte, la que corresponde al plazo de siete meses y medio, lo cierto es, que se les exige un impuesto sobre elaboracion, mientras nada elaboran, y la base de la anualidad, ó mas bien, de los cuatro meses y medio que duró la zafra, equivale á gravar una elaboracion pasada y concluida.

Y ¿no es retroactiva la ley que grava los productos pasados de una industria que nada produce en el tiempo que aquella ha de estar vigente?

En el comercio y en las negociaciones industriales, no se podría obtener resultado alguno, ni habria empresa posible, si consumadas sus operaciones, concluidos sus negocios, pudieran todavía gravarlos las leyes. Gravar el trabajo concluido, equivaldría á matar las industrias de todo genero, y no habria seguridad en los intereses de nadie, si se cuotizaran para gravarlas con impuestos las utilidades adquiridas.

Podría decirse, que en algunas de las haciendas de los quejosos habia caña molidera al publicarse la ley reclamada, y pudiera elaborarse azucar y miel; pero ni la ley grava los sembrados de caña, y cuando la existencia es una pequeña cantidad comparada con la que se muele en cada zafra anual, la base de la anualidad da el mismo resultado de gravar los productos adquiridos y ni siquiera existentes.

Las autoridades informantes dicen, que si las cuotas fueron excesivas, no por eso es la ley retroactiva; y efectivamente, esas cuotas no solo son excesivas sobre las anteriores, no obstante que el impuesto es también el mayor que se ha decretado, sino que lo son hasta un grado enorme sobre las cantidades que se pudieran elaborar con la caña existente en las muy pocas haciendas que la tienen moledera. Pero la retroactividad se hace consistir según el escrito de queja, no en el exceso de las cuotas ni en que se cobren en siete meses y medio las contribuciones que debieran pagarse en un año, sino en que la elaboración estaba concluida antes de que la ley estuviera en vigor, en que nada se elabora ni puede elaborarse en plazo que ha de regir la misma ley, en que la elaboración de 1875 será gravada por otra ley posterior al último día que fija la que se reclama, y en que se grava por consiguiente una industria que no ha de producir durante la vigencia de la ley, por los productos adquiridos con anterioridad.

Y hemos visto ya, que por los testigos y certificados que se han presentado, está plenamente probado que la elaboración concluyó en todas las haciendas de los quejosos antes del 15 de Mayo, y creo haber demostrado que realmente adolce la ley del vicio de retroactividad.

Pero ese vicio se hace palmario, con lo que pasó respecto de la hacienda de San Carlos: el Administrador presentó en 15 de Mayo una manifestación á la oficina recaudadora de rentas del Distrito, diciéndole, que la finca se clausuraba, esto es, que no elaboraría azúcar ni miel para lo sucesivo, con el objeto de que no le cobrasen las contribuciones impuestas á esa industria por la ley que se reclama; sus gestiones no dieron resultado, y antes bien, el día 17 se publicó en el Distrito y se mandó fijar en la hacienda el Decreto N° 55 que establece:

“Hasta el 31 de Diciembre del presente año, ninguna finca azucarera se dará por

clausurada si tiene caña sembrada en los términos de su comprensión.” Luego para causar el impuesto sobre elaboración, no es preciso que se elabore; sino basta con que se haya elaborado azúcar ó miel y que se tenga caña sembrada, sin embargo de que no se haya gravado esa siembra ni el cultivo de esa planta.

Reasumiendo: “Los Tribunales federales pueden y deben calificar la legitimidad de las autoridades, si estas con sus órdenes violan la garantía del artículo 16 del Pacto federal.” El C. Lic. Agustín Clavería que sancionó la ley reclamada, no fué Gobernador legítimo del Estado, y por consiguiente con la ejecución de esa ley, se viola en la persona de los quejosos la garantía citada, y que invocan estos: Y por último, que también se viola la garantía del artículo 14 del mismo Código, porque la ley reclamada es retroactiva.

Por todo lo que el Promotor pide, se declare en los términos del principio, que repite para concluir.

Morelos, 10 de Julio de 1874.—*Nicolas Medina.*

Son copias que certifico. Morelos, Julio 22 de 1874.—*Luis G. Lalastila*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Cuautla de Morelos, Julio 15 de 1874. —Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto del C. Agente de negocios Julian Montiel y Duarte, quien á su vez es apoderado legítimo de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Pío Bermejillo, D. Isidoro de la Torre, D. José Toricillo Guerra, D. Joaquin García Icazbalzeta hermanos y D. Alejandro Arenas, contra el decreto del Estado de Morelos de 7 de Mayo del presente año, por creer que con su ejecución se vulneran en sus personas las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución federal de 1857; vistas

las pruebas rendidas; lo alegado por los quejosos y el O. Promotor fiscal, y

Considerando respecto á lo que concierne al artículo 16.

1º: Que los peticionarios creen violada en sus personas, con motivo de la ejecución del decreto de 7 de Mayo, la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución en su primera parte; y para fundar la procedencia del recurso de amparo, exponen las siguientes proposiciones que han pretendido demostrar con extensos razonamientos, y comprobar en cuanto á los hechos, con varias pruebas rendidas oportunamente: 1º: La prescripción constitucional del artículo 16 en su primera parte, consigna como uno de los derechos del hombre, el de no poder ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito *de la autoridad competente*, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 2º: La persona que como encargada del Poder Ejecutivo del Estado promulgó el decreto de 7 de Mayo, no era Gobernador legítimo del mismo, por cuya razón no es autoridad competente. 3º: De las proposiciones anteriores rectamente se infiere: que puede hacerse efectivo el decreto en cuestión, sin que se viole en sus personas el artículo 16 en la parte que se refiere *á la autoridad competente*, siendo por tanto, indudable la procedencia del juicio de amparo.

2º: Que de la segunda proposición arriba trascrita, no se infiere sin embargo la tercera, y por lo mismo, no es necesario tomar en consideración las razones que para fundar aquella se exponen, ni las pruebas que en su comprobación se han rendido, pues el suscrito Juez la *supone* absolutamente cierta.

3º: Que en comprobación de lo anteriormente expuesto, hay que tener presente que, según el tenor literal del artículo 16 de la Constitución, se comprende desde luego que se refiere, *no á los requisitos que deban tener las leyes, sino á aquellos con que deban aplicarse en caso de ejecución forzo-*

sa, los cuales fueron previstos y consignados en el citado artículo como garantías del hombre, para asignarle sus derechos contra el abuso de las autoridades inmediatamente ejecutoras de las leyes. Estos requisitos que constituyen cada uno por sí solo una garantía, son los siguientes: 1º: mandamiento escrito; 2º: de la autoridad competente; 3º y 4º: expresión del motivo y fundamento de la causa legal del procedimiento.

4º: Que por lo mismo, las palabras *autoridad competente*, no se refieren ni de una manera remota á la competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo para expedir y promulgar las leyes y decretos, sino á la de las autoridades mismas que directa ó inmediatamente las ejecuten ó traten de ejecutar.

5º: Que examinando no literal, sino científicamente el artículo 16 que nos ocupa, bajo el punto de vista de su interpretación, y siguiendo para esto las reglas fundamentales y generales consignadas por uno de los mejores intérpretes de la mas difícil de las legislaciones (M. H. C. de Savigny—*Traité de Droit Romain—Livre 1º Chapitre 4º*) obtendremos el mismo resultado. Para este efecto, es preciso desde luego convenir; en que el artículo 16 no contiene ni una palabra impropia que denuncie una contradicción en sus términos con su sentido, ni una frase indeterminada que encierre un pensamiento incompleto; de lo cual se infiere, que en su expresión no es defectuosa, y en tal virtud debe examinarse en primer lugar, en cuanto á su lenguaje; en segundo, respecto á la hilación lógica de sus conceptos; en tercer lugar, con relación á su historia; y por último, en su conexión con el Código de que forma parte.

6º: Que respecto al primer punto, es tan clara la significación del artículo 16 en el sentido de que se refiere á las autoridades inmediatamente ejecutoras, y no á las que simplemente han expedido ó promulgado las leyes, que de lo contrario tendríamos

que admitir, que con menosprecio de la propiedad, en el tecnicismo jurídico y en el idioma de la legislación, los legisladores constituyentes comprendieron á la ley en las palabras *«mandamiento escrito,»* al legislador, en las *de autoridad competente,* y al hecho de promulgación, en la *vóz procedimiento.*

En cuanto al segundo punto, esto es, en cuanto á la hilación lógica de los conceptos que encierra, es tan absurdo el suponer que hablo de las autoridades que expiden y promulgan las leyes, que en esta hipótesis tendríamos que convenir, en que conforme á nuestro derecho público, ninguna ley tendría fuerza á no ser que los poderes Legislativo y Ejecutivo expresaran en ella, y en la forma de mandamiento escrito, los motivos y fundamentos de las causas legales, que hubieran tenido el uno para expedirla y para promulgarla el otro. De esta manera, no habría una sola ley en la República que no atacara una garantía individual, y como sea absolutamente falso, claro es que el artículo 16 no se refiere al poder Ejecutivo y Legislativo, sino á las autoridades meramente ejecutoras de la ley. Es esto tan cierto, que el segundo pensamiento que contiene el artículo 16, envuelve una escepcion al principio antes consignado, pues de otra manera no puede comprenderse cual sea la hilación de ambos conceptos para hallarse en el mismo artículo. Ahora bien; si una escepcion, para que lo sea realmente, debe ser de igual género que el que la regla contiene; como esta escepcion, se refiere á un acto que puede ser ejecutado por una sola persona y sin requisito alguno, claro es que la regla no puede menos de comprender sino actos de las autoridades ejecutoras de las leyes.

Respecto al tercer punto, ninguna persona de las versadas en nuestro derecho constitucional, ignora que la garantía del artículo 16, así como la mayor parte de los derechos individuales, se hallaban anteriormente consignadas en la legislación común,

TOMO VI.—PARTE II.

y que solo se incluyeron en la Constitución de 1857, para darles ese carácter de inviolabilidad que exigen en el sistema democrático los sagrados derechos del hombre. Esto supuesto, en vano se buscará en los precedentes de nuestro derecho público y privado, anterior al Código de 1857, un solo caso que autorice á juzgar con motivo de la competencia de una autoridad subalterna del orden administrativo, la legitimidad de los altos funcionarios de un Estado. Por último, la comparación del artículo 16 con los demás de nuestra Constitución, no nos permite decidir, que en el supuesto de que el poder Judicial de la Federación pudiera conocer en todo caso de la legitimidad de los altos funcionarios de un Estado, tan importante facultad estuviera virtualmente contenida en las palabras *autoridad competente,* de que usa el artículo en cuestión, pues tendríamos que convenir entonces, en que por medio de un recurso de amparo que en realidad solamente tiene una instancia, porque la revisión no la causa, en que no se reconocerían como parte á las autoridades cuyos títulos fueran el objeto del debate judicial, y cuya resolución traería consigo que grave responsabilidad para las personas se dicen usurpadoras, pudiera ejercer tan alta facultad. Por el contrario, la letra y el espíritu de nuestra Constitución, no permiten que la materia de un juicio de tan elevada importancia á nuestro régimen federal y que versa acerca de la comisión de un delito político; se trate de una manera incidental, y así se examine la fuerza de una ley de la mayor importancia en un Estado, y la responsabilidad de un funcionario, sin que ni aun siquiera disfrute este de una sola de las garantías que á todo hombre otorga nuestra carta fundamental.

7º: Que lo anteriormente expuesto, no quiere decir que la garantía consignada en la primera parte del artículo 16, no pueda violarse por una ley, pues que como todas las de su especie, bien puede serlo por leyes ó actos de las autoridades. Esto tendia lu-

gar siempre que alguna ley ordenara un procedimiento sin todos, algunos, ó alguno de los requisitos constitucionales, ó que la autoridad procediera sin observarlos.

8º: Que en el presente caso, el decreto de 7 de Mayo no previene á sus ejecutores que procedan sin cumplir con los requisitos que previene la Constitucion, ni tampoco los quejosos han impugnado la competencia de los ciudadanos administradores de rentas del Estado, para hacer el cobro del impuesto que en aquel decreto se establece.

9º: Que por todo lo anteriormente expuesto, habiéndose demostrado hasta la evidencia, que la autoridad de que habla el artículo tantas veces citado es la inmediata ejecutora, sobre su competencia debió haber versado el debate, y en este sentido ordenarse el procedimiento. Es por tanto enteramente agena á este juicio, la discusion sobre competencia y legitimidad del poder Ejecutivo que promulgó el decreto.

10º: Que aun en el supuesto de que la autoridad judicial de la Federacion, pudiera conocer con motivo de las palabras *la autoridad competente* del artículo 16 y por vía de amparo, de la legitimidad del poder ejecutivo de un Estado, el suscrito Juez en el presente juicio no podría hacerlo, porque ni siquiera se ha oído la voz informativa del C. Gobernador del Estado; y no se ha oído, porque al sustanciar el recurso, se pidió como debía pedirse conforme á la ley, y como lo solisitaron, tanto los quejosos como el C. Promotor fiscal, el informe correspondiente á las autoridades subalternas contra cuyos actos se elevó la queja y se promovió el juicio.

11º: Que en la hipótesis de que con motivo de la violacion de alguna otra garantía, y de las consignadas en el mismo repetido artículo, pudiera examinarse el vigor y fuerza de una ley por falta de legitimidad en el poder encargado de su promulgacion, no podría sin ombrargo tenerse en cuenta en el presente juicio, porque se ha concretado á una sola, que es la de competencia de que

se hace mención en el artículo en que se apoyó la queja, y sobre la cual ha rodado únicamente la discusion judicial.

12º: Que de todo lo expuesto, rectamente se infiere: que no obstante que fuera verdad que la persona que como encargado del poder Ejecutivo del Estado promulgó el decreto de 7 de Mayo último no era Gobernador legítimo del mismo, y que por esta razon no era autoridad competente; de aquí en manera alguna se deduciría, que no puede hacerse efectivo sin violarse el artículo 16 de la Constitucion, en la palabras que dicen: «de la autoridad competente», y por los mismo, no es preciso tomar en consideracion la luminosa controversia acerca de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, y de la competencia ó incompetencia, legitimidad ó ilegitimidad de los altos funcionarios del Estado de Morelos.

Considerando respecto á la violacion del artículo 14.

1º: Que este artículo literalmente dice: «No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley.»

2º: Que interpretando este artículo bajo el dominio de las mismas reglas prescritas para la interpretacion del 16, y haciendo las debidas deducciones, resulta: 1º: que no puede hacerse una aplicacion de la ley, si no hay un hecho que la motive; 2º: que la ley en sí misma no debe referirse á hechos anteriores á su promulgacion; 3º: que si la ley no debe referirse á hechos anteriores, con mayoría de razon las autoridades encargadas de su cumplimiento, no pueden aplicarla á aquellos.

3º: Que el decreto de 7 de Mayo no previene ningun hecho anterior, pues que gravó los productos que se elaboraran hasta el fin de este año, á contar desde el día en que comenzó á estar vigente; de lo cual resulta, que en sí misma no tiene efecto retroactivo.

4º: Que respecto de la aplicacion de este decreto á los quejosos, ella debe y ha debido hacerse previa la intervencion de un hecho que la motive, y de un hecho posterior á la ley.

5º: Que de autos consta plenamente probado, que los quejosos terminaron la elaboracion de los productos de sus haciendas, antes del dia en que comenzó á estar vigente el referido decreto, y que durante el tiempo que este abraza, nada tienen ya que elaborar.

6º: Que por lo mismo, en el presente caso aun no ha existido ni podido existir el hecho, ó sea la condicion impuesta por la ley para su aplicacion.

7º: Que esto no obstante, como ella trata de hacerse efectiva por los ciudadanos administradores de rentas á los peticionarios, esto no puede ser de otra manera, sino aplicándola á un hecho anterior, y por lo mismo dándole un efecto restroactivo que en sí no tiene.

8º: Que esto es tanto mas cierto, cuanto que no habiendo satisfecho los quejosos, por motivos que no es del caso examinar, la contribucion justamente debida y causada en los meses de este año, anteriores al de Mayo, es claro que por la aplicacion que de la presente ley trata de hacerse, se quiere remediar este grave mal.

Por todas estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 14, 16, 101^º y 102 de la Constitucion federal, declaro:

Primero: que la Justicia de la Union no protege ni ampara á los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Pío Bermejillo, D. Isidoro de la Torre, D. J. T. Guerra, D. Joaquin G. Icazbalceta y hermano y D. Alejandro Arenas, contra el decreto de 7 de Mayo del presente año, en cuanto se afirma que infrinje en sus personas la garantia que otorga el artículo 16 de la Constitucion.

Segundo: que la Justicia de la Union ampara y protege á las personas antes designadas, contra la ejecucion del mismo decreto por violarse en ellas con este acto, la

garantia consignada en el artículo 14 de la Constitucion.

Tercero: hágase saber á ambas partes, y remítase el expediente original á la Suprema Corte de Justicia para su revision, acompañando las copias de estilo.

Cuarto: publíquese por la prensa.

Así lo decretó y firmó el C. Juez inrerinio de Distrito del Estado de Morelos, Emilio Ordáz, por ante mí.—Doy fé.—*Emilio Ordáz*,—*Luis G. Labastida*, secretario.

Es copia que certifico, Morelos, Julio 22 de 1874.—*Luis G. Labastida*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 11 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Robert, como apoderado sustituto del C. Julian Montiel y Duarte, á su vez apoderado jurídico de los Sres. Ramon Portillo y Gomez, Don Pío Bermejillo, Don Isidoro de la Torre, Don José Toriello Guerra, Don Joaquin Icazbalceta hermanos y Don Alejandro Arenas, contra el decreto de 7 de Mayo del presente año, expedido por la Legislatura del Estado de Morelos, alegando que con su aplicacion se vulneran las garantías que reconoce la Constitucion federal en sus artículos 14 y 16. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; la prueba rendida por los quejosos; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando en cuanto á la incompetencia por ilegitimidad, objetada al C. Lic. Agustin Clavería, que como Gobernador sancionó la ley de 8 de Mayo reclamada: que si bien por fundamentos de diverso origen y naturaleza, los cuales quedan consignados en los actos respectivos, como la expresion del voto de cada uno de los Magistrados que formaron mayoría en este caso,

la Corte considera, que fué legítima y competente la autoridad ejercida por el C. Lic. Agustín Clavería, al sancionar como Gobernador del Estado de Morelos la ley de 8 de Mayo del corriente año.

Considerando en cuanto al efecto retroactivo que se atribuye á esa ley, ó á la aplicación que de ella se hace á los quejosos: que la retroactividad de una ley, ó de su ejecución, consiste en aplicarla á lo pasado con perjuicio de un derecho legítimamente adquirido: que entre los principios constitucionales del derecho de propiedad, figura como uno de los mas respetables, el de que para el pago de los impuestos emanados de la obligación genérica de contribuir para los gastos públicos, es requisito previo é indispensable el de expedición de una ley, que marque la cuota, el tiempo, la forma y demás circunstancias determinantes de la contribución que se ha de satisfacer: que la regla anterior, general y sin escepcion, está sancionada por la jurisprudencia universal: que en lo concerniente á la República mexicana, forma una de la bases de su carta fundamental, puesto que la fracción 2ª del artículo 31 de la Constitución de 1857, designa como obligación de todo mexicano, la de contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y municipal en que resida, de la manera proporcional y equitativa *que dispongan las leyes.*"

Que semejante principio no puede ser mas decisivo para el efecto de que no basta la obligación genérica de contribuir para los gastos públicos, sino que se requiere además la expedición de leyes relativas al pago de contribuciones, leyes que fijan las condiciones antes enunciadas, y sin las cuales todo cobro de impuestos es abusivo é inconstitucional.

Que el artículo 33 de la Carta política de 1857, al consignar la obligación que tienen los extranjeros de contribuir para los gastos públicos, agrega que ha de ser *de la manera que dispongan las leyes,* re-

produciendo así la misma garantía, universal é invariable, establecida para los mexicanos.

Que la leyes expedidas para el pago de contribuciones, no pueden referirse al tiempo pasado antes de su expedición, porque entonces, no existiendo esas leyes, no existía tampoco la obligación que de ellas emana, y la retroactividad que se les diera, atacaría un derecho claro y bien definido de jurisprudencia universal, sancionado expresamente por la Constitución mexicana.

Que el efecto retroactivo de una ley de contribuciones aplicada á tiempo anterior á su expedición, sería todavía mas patente é injustificable, haciéndose esa aplicación á pagos procedentes de giros ó industrias, fenecidos antes de que se diera la ley.

Que en el presente caso, se ha pretendido aplicar la ley de 8 de Mayo del corriente año á haciendas de caña, habia terminado ya sus elaboraciones, y que en consecuencia se le ha dado efecto retroactivo, con violación de un derecho legítimamente adquirido.

Por tales consideraciones y fundamentos, se declara: 1ª: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, en lo concerniente á la violación que han alegado del artículo 16 de la Constitución federal. 2ª: Que la Justicia de la Union los ampara y protege, en cuanto á la violación del artículo 14 del mismo Código, por haberse dado efecto retroactivo á la ley de 8 del último Mayo, al aplicarla á las haciendas de que son dueños.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auer.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Alta-*

mirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 2 de 1874.—*Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Lic. Juan N. Quintana, á nombre de los conductores de coches de esa Capital, contra el Gefe político, que les cobra la contribucion de rebajo relativa á la Guardia Nacional.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, obsequiando debidamente el auto anterior, dice: que por los quejosos está comprobado con las respectivas bolotas el hecho de que se les cobra la contribucion de guardia nacional, en virtud de una ley que se opone á lo que preceptúa la Constitucion general.

Tal hecho es desde luego atentatorio y viola las garantías que la propia Constitucion otorga á los promoventes en su artículo 16, por ser molestados en sus personas é intereses por mandamiento de autoridad que no puede fundar legalmente el procedimiento que ha dado motivo á la interposicion del presente recurso.

Por lo tanto, el amparo procede, y debe concedérseles para que en lo sucesivo no se les vuelva á obligar al pago de una contribucion anticonstitucional.

Sírvase V. C. Juez, así decretarlo como se lo pide el suscrito, en conformidad con lo que previene el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869; así como el que se ponga esta hoja de papel con la del sello respectivo.

Zaragoza, Mayo 24 de 1874.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Julio 13 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Antonio Terreros, José María Gama, José de Jesus Urrutia, Modesto Aguilar, Pablo Cruzado, Ramon Suarez, Miguel Gonzalez, Domingo Bonilla, Felipe Pastrana, Tomás Zamora, Lino Perez, Ignacio Romero, Pascual Gonzalez, Florencio Carrillo, Pedro Ruiz, Manuel Osorio, José María García, Pedro Romero, Antonio Bravo, Andres Ramirez, Andres Gonzalez, Mariano Ruiz, José de la Luz Zamora, Francisco Mateos, Rafael Torillo, Anastacio Hernandez, Laro Velasquez, Ignacio García, Miguel Romero, José de Jesus Lozano, José de Jesus Salgado, Francisco Avila, Miguel Gonzalez, Esteban Parra, Francisco Lozano, Benito Ceroy, Tranquilino Rosete, José María Perales, Andres Huidrobo, Antonio Caneela, Donaciano Castillo, Miguel Perez, Miguel Contreras, Juan Rodriguez, Joaquín Ennais, Antonio García, Agustin Huidrobo, Agustin Islas, Antonio Dominguez, Guadalupe Gonzalez, Miguel Aguilar, Juan N. Rojas, José María Hernandez y Miguel Sanchez, contra el hecho de exijírseles por la Gafatura política, el pago de la contribucion de rebajos, fundándose para lograr su objeto, en que con arreglo á la Constitucion federal, corresponde esclusivamente al Congreso de la Union la facultad de reglamentar la Guardia Nacional, y por consiguiente las autoridades del Estado han invadido con el reglamento expedido y con la exaccion del impuesto que establecen: la esfera de las autoridades federales: el informe del Gefe político desmintiendo el hecho de que por esa oficina se haga el cobro, pues que en la actualidad no tiene ninguna intervencion, segun decreto de 30 de Setiembre de 1871,